

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXIV — JULIO - SEPTIEMBRE DE 1956 — N.º 97

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

ROLANDO MERINO REYES

ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA

JUAN BIANCHI BIANCHI

QUINTILIANO MONSALVE JARA

MARIO CERDA MEDINA

ESTEBAN ITURRA PACHECO



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA — CONCEPCION (CHILE)

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

MARIA M. CIFUENTES DE CONTRERAS

CON JOSE CLEMENTE CONTRERAS ERICES Y OTROS

NULIDAD DE CONTRATOS E INSCRIPCIONES

Apelación de la sentencia definitiva

MATRIMONIO — SOCIEDAD CONYUGAL — ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL — BIENES RAICES SOCIALES — ENAJENACION DE INMUEBLES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL — VENTA — VENTA DE BIENES RAICES EMBARGADOS — MEDIDAS PRECAUTORIAS — PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS — NULIDAD — NULIDAD ABSOLUTA — INTERES EN ALEGARLA — MUJER CASADA — MERA EXPECTATIVA — GANANCIALES — INTERES PECUNIARIO — ACCION DE NULIDAD — CONTRATO SIMULADO — SIMULACION RELATIVA — SIMULACION ABSOLUTA — PARTICION DE BIENES — PARTICION POR ACTO ENTRE VIVOS — ACTO JURIDICO — INSTRUMENTO — NULIDAD DEL ACTO Y NULIDAD DEL INSTRUMENTO.

DOCTRINA.— Si vigente la sociedad conyugal, y antes de la modificación de la Ley N.º 10.271, el marido enajena varios inmuebles sociales embargados y afectos a prohibición de contratar, dándolos en venta a sus hijos simuladamente, esto es, sin que haya realmente precio, la mujer casada no puede alegar la nulidad absoluta de esos contratos, ya que

careciendo de derechos en el patrimonio de la sociedad y teniendo sólo una mera expectativa de adquirir su mitad de gananciales a la disolución de ésta, le falta el interés pecuniario que la ley exige para hacer procedente la acción de nulidad absoluta.

Habiéndose acreditado que bajo la forma ostensible de ciertos contratos de venta se oculta, me-

diante simulación relativa, una partición efectuada por acto entre vivos y que realiza el marido en favor de sus hijos, tal acto tiene fuerza obligatoria respecto de la mujer, ya que pendiente el régimen de comunidad de ganancias ningún perjuicio real y efectivo ha podido ocasionársele a ésta, pues no ha llegado el caso de valorizarlo.

La nulidad del acto jurídico no acarrea la invalidez del instrumento en que consta, y la impugnación de la verdad de las declaraciones formuladas por las partes no importa atacar el instrumento mismo, en cuanto a la fe pública de él, desde que no por ser falsas aquéllas deja de ser válido este último (*).

(*) Disentimos de la doctrina en que se funda el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

Aunque el caso no será de ordinaria ocurrencia en el futuro, dado que desde la vigencia de la Ley N.° 10.271, de 2 de Abril de 1952, los actos de enajenación voluntaria, gravamen y arrendamiento a largo plazo que el marido celebre sobre inmuebles sociales serán nulos relativamente si falta la autorización de la mujer, es lo cierto que podría plantearse la misma cuestión suscitada en este juicio respecto a las enajenaciones de bienes raíces anteriores a dicha ley, o a cualquier otro acto de administración o de disposición del marido que, reca-

Sentencia de Primera Instancia

Los Angeles, primero de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Vistos:

A fojas 14, en lo principal de dicha solicitud, doña María Mercedes Cifuentes de Contreras, labores del sexo, domiciliada en calle Lautaro 369, expone: Que según consta de la copia de la escritura pública que acompaña de fecha 14 de Julio de 1936, otorgada ante el Notario de esta ciudad don Pedro Anibal Ruiz, su marido, don José Clemente Contreras Erices, vendió a su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes las propiedades denomi-

yendo sobre bienes muebles, adoleciera de nulidad absoluta.

Según la sentencia de alzada que comentamos, vigente la sociedad conyugal la mujer no puede alegar la nulidad absoluta de los contratos de venta que versan sobre inmuebles sociales —celebrados antes de la Ley N.° 10.271— y que el marido y padre de familia otorgó en favor de sus hijos, aunque ellos adolezcan de objeto ilícito por recaer sobre bienes embargados y faltarles causa real y lícita, por ser simulado el precio, señalando como única razón la de que la mujer carece de todo derecho en el patrimonio de la sociedad conyugal pues tiene una mera expectativa de adquirir su mi-

NULIDAD DE CONTRATOS

407

nadas "Chacayal" y "El Porvenir" que se individualizan y deslindan en la escritura de fojas 1, la que pide se tenga como parte integrante de la demanda. Por escritura pública de 29 de Julio de 1936 otorgada ante el Notario don Pedro A. Ruiz, cuya copia, también acompaña, su hijo Clemente Segundo Contreras vendió estas mismas propiedades, "Chacayal" y "El Porvenir" a sus hijos: Josefina, Laura Estela, Apolonia de las Mercedes, Ga-

briel, Teodoro Orlando, Imilce Nora y Rosa Eliana Contreras Cifuentes. Con anterioridad a esta escritura y con fecha 27 de Julio de 1936, según escritura ante el Notario don Pedro A. Ruiz, que también acompaña, Clemente Segundo Contreras había constituido a su favor y de su marido derechos de usufructos vitalicios sobre las mismas propiedades. Que tanto la escritura de venta de su marido a su hijo Clemente Segundo, como la venta de éste

dad de gananciales al disolverse esta última, es decir, le falta el interés pecuniario que el artículo 1683 del Código Civil exige que concurra para hacer procedente la acción de nulidad absoluta.

Lo mismo sostiene Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra "Tratado Práctico de las Capitulaciones Matrimoniales, de la Sociedad Conyugal, etc." —N.° 582, página 382—.

Reconociendo la autoridad de tales argumentaciones, no creemos que pueda darse este alcance al artículo 1683 del Código Civil.

Desde luego, tratándose de una sanción establecida en interés general de la colectividad, como es la nulidad absoluta, y, aún más, de actos viciados de objeto o causa ilícitos, que generalmente comportan un fraude respecto de la mujer casada realizado por el marido con abuso de sus facultades administrativas, pensamos que la sola necesidad de prestar protección a la cónyuge debería inclinar más hacia una interpretación amplia, que no restrictiva de este precepto.

Es cierto que pendiente la sociedad

conyugal la mujer carece de dominio sobre los bienes sociales —Artículo 1752 del Código Civil— y que sus derechos de comunera y de acreedora por aportes o recompensas sólo se hacen efectivos al disolverse aquélla —antes están como latentes—, pero no es menos que el "interés en alegar la nulidad" exigido por el artículo 1683 del Código Civil, no radica sólo en ser titular del dominio u otro derecho real sobre los bienes objeto del acto nulo, sino que el concepto es más amplio, ya que consiste en todo provecho patrimonial, directo o indirecto, que pueda seguirse para el interesado como consecuencia de la declaración de nulidad.

Así lo entienden, en la doctrina, Luis Claro Solar —"Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado", Tomo XII, página 606— y Arturo Alessandri Besa —"La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno", N.° 600, página 549— y la jurisprudencia —"Revista de Derecho y Jurisprudencia": Tomo XXXVI, Sección Primera, página 104; Tomo XXXIV, Sección Segunda, pági-

a sus hermanos, antes señaladas, son simuladas, ya que su marido repartió toda su fortuna entre sus hijos otorgándoles diversas escrituras por distintas propiedades sin haber recibido un solo centavo por las transferencias de ellas, perjudicándola en sus intereses. Sus hijos, sorprendiendo al Conservador de Bienes Raíces lograron inscribir esas ventas, a pesar que existían sobre las propiedades varios embargos (cuatro) y una prohibición de enajenarlas y

gravarlas, según consta del certificado de prohibiciones y gravámenes que acompaña; y se negaron a inscribir el usufructo a su favor. Los embargos y prohibiciones que afectan a las propiedades ya señaladas, se encuentran aún vigentes, como lo acredita con los certificados que acompaña. En consecuencia, son nulos de nulidad absoluta los contratos de compraventa celebrados ante el Notario de esta ciudad don Pedro Anibal Ruiz de fechas 14 de Julio

na 33; Tomo XXXIX, Sección Primera, página 37—.

Pues bien, entendido en esta forma el concepto de "interés", es evidente que lo tiene la mujer, para eliminar, mediante la nulidad, los efectos perjudiciales de los actos de enajenación que respecto a los inmuebles sociales otorgó su marido. Una vez declarada aquella y restituidos los bienes al haber social, se siguen para la cónyuge inmediatas y concretas ventajas patrimoniales que se presentan sin necesidad de esperar la disolución de la sociedad conyugal.

Desde luego, restituidos esos bienes al haber, podrá ella ejercitar con eficacia el derecho que le confiere el artículo 1740, N.º 5.º del Código Civil para obligar a la sociedad, es decir, al marido, a su mantenimiento congruo, sea con estos bienes, sea con sus frutos, que también son sociales. Síguese de aquí que la disminución o extinción del patrimonio social por actos nulos y fraudulentos, afecta directamente a la eficacia de la acción alimentaria de la mujer casada, aún pendiente la sociedad conyugal, situación

que determina a su respecto un provecho patrimonial evidente, es decir, un interés pecuniario y actual en la declaración de nulidad tendiente a obtener la restitución de esos bienes.

Por otra parte, cuando ocurre —como en el caso sub-lite— que las enajenaciones han sido fraudulentas y simuladas, la situación es mucho más clara y directa.

En efecto, el artículo 155 del Código Civil autoriza a la mujer para pedir, con motivo del fraude del marido, la separación judicial y total de bienes. Pues bien, precisamente este derecho de la cónyuge y la eficacia de su ejercicio pone de manifiesto el interés actual y patrimonial que le asiste en alegar, previamente a la separación, la nulidad de las enajenaciones fraudulentas.

Porque, si ella no alega previamente la nulidad de las ventas efectuadas por el marido, ¿qué utilidad práctica le reportaría el ejercicio de la acción de separación total? ¿Acaso podría adjudicarse, una vez decretada la separación, bienes que ya no pertenecen a la socie-

NULIDAD DE CONTRATOS

409

y 29 de Julio de 1936, cuyas copias autorizadas acompaña, como también son nulas de nulidad absoluta las mismas escrituras públicas señaladas, en atención al vicio de objeto ilícito que afectaba a los bienes vendidos al momento de sus otorgamientos. La primera escritura se refiere a la venta efectuada por su marido don José Clemente Contreras Erices a su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes de los predios "Chacayal" y "El Porvenir"

y la segunda a la venta efectuada por este último a sus hermanos. En esta virtud viene en deducir demanda en contra de las siguientes personas: de don José Clemente Contreras Erices, agricultor, domiciliado en el predio "Chacayal" de la subdelegación Cuñibal; de don Clemente Segundo Contreras Cifuentes, agricultor, actualmente en la Cárcel Pública; de doña Josefina Contreras Cifuentes, sin profesión, representada por su marido don Armando

dad sino que a terceros? En modo alguno.

Es decir, sin la nulidad, la separación y su derecho a pedirla son ilusorios; con la nulidad, la mujer obtiene el provecho patrimonial de adquirir bienes para sí al decretarse la separación. Y aquí radica, justamente, su interés patrimonial y actual en alegar la invalidez absoluta del acto, requisito del artículo 1683 del Código Civil.

Finalmente, también le asiste un interés indirecto. La cónyuge es acreedora del marido por los aportes, saldos, precios y recompensas que constituyen el resto de su haber —artículos 1770 y 1773 del Código Civil—. Es cierto que hará efectivos estos créditos al disolverse la sociedad, pero no lo es menos que, al igual que todo acreedor, le interesa actual y vivamente que "no se altere la situación de fortuna del deudor" —su marido— en forma de poder causarle un perjuicio cuando ejerza sus créditos. —Claro Solar: Obra citada, Tomo XII, N.° 1926, página 606—.

La Corte Suprema ha resuelto que

"...determinar si el provecho existe o no en la realidad está librado a una apreciación exclusivamente del actor" —"Revista de Derecho y Jurisprudencia", Tomo XXXVI, Sección Primera, página 104—; y que "...al disminuirse en cantidad considerable el haber de la sociedad conyugal, se causa un perjuicio a la mujer en los derechos que le otorga la ley en la mitad de ese haber" —"Gaceta de los Tribunales": Año 1919, 2.° Semestre, Sentencia N.° 92, página 499—.

La sentencia que ahora comentamos expresa que perjuicio real y efectivo no puede haberse ocasionado a la cónyuge, porque no ha llegado el caso de valorizarlo. No obstante, al hacerse esta apreciación se prescinde, por una parte, del hecho de que "interés" y "perjuicio" no son conceptos sinónimos, y de que, por la otra, "no se requiere para poder alegar la nulidad que el interés esté representado por una cantidad determinada" —Claro Solar: cita anterior—.

En suma, nos parece que el alcance del artículo 1683 del Código Civil es amplio y que, por lo mismo, obteniendo

Contreras Quezada, agricultor, domiciliado en calle José de Manzo N.º 366; de doña Laura Estela Contreras Cifuentes, sin profesión, representada por su marido don Ernesto Flores, peluquero, domiciliado en calle Manuel Rodríguez N.º 569; de doña Apolonia Mercedes Contreras Cifuentes, labores del sexo, representada por su marido don Darío Rebolledo Quezada, agricultor, domiciliado en Subdelegación Cuñibal; de don Gabriel Contreras Cifuentes, agricultor, domiciliado en

Tucapel s/n.; de doña Imilce Norra Contreras Cifuentes, sin profesión, representada por su marido don Mario Fuentealba, empleado, domiciliado en Santiago, calle Aurora Mira 605; de don Teodoro Orlando Contreras Cifuentes, agricultor, domiciliado en calle Villagrán s/n., y de doña Rosa Eliana Contreras Cifuentes, labores del sexo, representada por su marido don Fernando Contreras Loyola, marino, domiciliado en Concepción, calle Rozas N.º 985. Además, dentro de

la mujer casada ventajas patrimoniales directas e indirectas —según creemos haberlo demostrado— con la declaración de nulidad absoluta de las enajenaciones fraudulentas efectuadas por el marido, le asiste, aún vigente la sociedad conyugal, el derecho a alegar esa nulidad, por tener interés patrimonial y actual en ello.

Finalmente, en el fundamento 29.º de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, se establece que bajo la forma ostensible de contratos de venta se oculta, por simulación relativa, un acto de partición entre vivos que, con arreglo al artículo 1318 del Código Civil, pudo ejecutar el marido y padre de familia con sus hijos y el cual tendría fuerza obligatoria para la mujer, a pesar de ser ella un tercero a su respecto, ya que pendiente el régimen de comunidad de gananciales ningún perjuicio real y efectivo ha podido ocasionársele, pues no ha llegado el caso de valorizarlo sino al tiempo de la disolución social.

Desde luego, la simulación relativa no se alegó como acción ni como excepción en el pleito, de modo que si se considera que este fundamento es resolutivo —como parece serlo—, habría ultra-petita.

Pero, aparte de esto, si la cónyuge es un tercero frente a las ventas celebradas por el marido en favor de los hijos comunes, quiere decir que la simulación relativa no puede serle oponible —artículo 1707 del Código Civil— y que ella sólo puede estarse a los contratos ostensibles de venta, cuya nulidad absoluta por lo mismo no puede enervarse probando entre otros contratantes una intención real distinta a la declarada, ya que sería dejar entregada esta nulidad a la posible colusión de las partes y hacer surtir efectos a la simulación relativa en perjuicio de terceros de buena fe. Obsta a ello el artículo 1707 del Código Civil.

De aquí que tampoco consideremos ajustada a derecho esta conclusión del referido fallo.

EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ

NULIDAD DE CONTRATOS

411

los deslindes generales de las ventas efectuadas por su marido a favor de su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes, y de éste a sus hermanos, se transfirió una propiedad de ella, la que fue inscrita por adjudicación a su favor en la partición de bienes de su padre don Pedro N. Cifuentes e inscrita a su nombre a fojas 72 vuelta y bajo el N.º 83 del año 1907, cuya copia autorizada rola a fojas 12 del cuaderno de medida prejudicial precautoria, autos N.º 30638. Se ha transferido así su propiedad sin que haya habido autorización judicial para la enajenación ni menos consentimiento de su parte, adoleciendo así las ventas de nulidad relativa en lo que respecta a la transferencia de su propiedad. Que, respecto a la nulidad absoluta solicitada anteriormente, a virtud de los embargos que afectaban a las propiedades vendidas, puede y debe ser declarada de oficio por el Tribunal, ya que la nulidad se acredita con el respectivo certificado de gravámenes. Entonces, como puede verse, los contratos de ventas a que ha aludido se han otorgado perjudicando sus intereses, ya que todos los bienes fueron adquiridos durante la sociedad conyugal habida con su marido. Por lo que, de acuerdo con lo expuesto y de las disposi-

ciones legales que cita, pide que se tenga por deducida esta demanda en contra de las personas antes individualizadas y en definitiva acogerla en todas sus partes, declarándose: 1.º Que son nulas, de nulidad absoluta, las escrituras públicas otorgadas ante el Notario de Los Angeles, don Pedro A. Ruiz, con fechas 14 de Julio y 29 de Julio de 1936, por haber sido otorgadas habiendo pendientes embargos y prohibiciones sobre las propiedades vendidas; 2.º Que son nulos, de nulidad absoluta, los contratos de compraventas a que se refieren las mismas escrituras, sobre los predios "Chacayal" y "El Porvenir" antes señalados; 3.º Que a virtud de dichas nulidades deben efectuarse las inscripciones, subinscripciones y cancelaciones que procedan para dejar sin efecto dichas escrituras públicas como sus respectivas inscripciones que se hubieren efectuado en el Conservador de Bienes Raíces y Dominio de este departamento, como también cualesquiera escritura pública o inscripción que algunas de las partes hiciere durante el transcurso de la tramitación de la causa; 4.º Que en las ventas a que se refieren las escrituras ya referidas en el N.º 1.º no queda comprendida la propiedad exclusiva de la parte demandante y

que se encuentra inscrita a fojas 72 vuelta y bajo el N.º 83 del Registro de Propiedades y Dominio de este departamento de 1907; y 5.º) Que se condene a los demandados solidariamente en las costas de la causa.

En el primer otrosí de la solicitud de fojas 14, antes mencionada, la demandante doña María Mercedes Cifuentes de Contreras, ya individualizada, expone: que subsidiariamente a lo principal deduce acción de simulación en contra de los mismos demandados, ya individualizados en lo principal y que pide se tenga por reproducido en esta petición, como también tenerla por deducida en contra de don José Contreras Cifuentes, agricultor, domiciliado en la subdelegación Cuñibal. Los hechos en que basa esta acción son los siguientes: 1.º—Por escritura pública de 14 de Julio de 1936 otorgada ante Notario de esta ciudad don Pedro A. Ruiz, su marido don José Clemente Contreras Erices vendió a su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes las propiedades denominadas "Chacayal" y "El Porvenir" que se individualizan en dicha escritura. Por escritura de fecha 29 de Julio de 1936 ante el mismo Notario señor Pedro A. Ruiz, Clemente Contreras Cifuen-

tes vendió estas mismas propiedades a sus hermanos e hijos legítimos de ella, Josefina, Laura Estela, Apolonia de las Mercedes, Gabriel, Teodoro Orlando, Imilce Nora y Rosa Eliana Contreras Cifuentes. Con anterioridad a esta escritura y con fecha 27 de Julio de 1936, su hijo Clemente Contreras había otorgado una escritura pública ante el Notario don Pedro A. Ruiz, en que se constituía sobre las mismas propiedades derecho de usufructo a su favor y de su marido. En atención a que sobre las propiedades afectaban varios embargos y prohibiciones de enajenar no se pudo efectuar las inscripciones en esa fecha de las transferencias ni del usufructo, conforme se lo decían sus hijos, ya que es analfabeta y tenía que tener confianza en sus hijos. El año 1950, y sorprendiendo al Conservador de Bienes Raíces, llegaron a inscribir las transferencias indicadas anteriormente, bajo los números 358 y 359, respectivamente, según lo acredita con la copia correspondiente. Por su parte, para inscribir el usufructo debió recurrir a la justicia y llegar a obtener el reconocimiento de su derecho, aun cuando siempre ha tenido la posesión de las propiedades. Que según consta de la escritura pública de 24 de Julio

NULIDAD DE CONTRATOS**413**

de 1936, otorgada ante el Notario don Pedro A. Ruiz de esta ciudad, su marido don José Clemente Contreras Erices, vendió a su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes una casa y sitio ubicada en calle Villagrán de esta ciudad, cuyos deslindes se expresan en ella, y que se inscribió a fojas 66, bajo el N.º 72 del Registro de Propiedades del año 1937. Por escritura pública de 29 de Julio de 1936 ante el Notario don Pedro A. Ruiz, su hijo Clemente Segundo Contreras vendió a Josefina, Apolonia de las Mercedes, Imilce Nora y Rosa Eliana Contreras Cifuentes, sus hijas, esta misma propiedad y que se inscribió a sus nombres a fojas 70 vuelta, bajo el N.º 78 del Registro correspondiente del año 1937, cuyas copias de las escrituras públicas correspondientes rolan en los autos sobre medida prejudicial precautoria, rol N.º 30638, de este mismo Juzgado. Que según consta de la copia de la escritura pública de 27 de Julio de 1936, ante el Notario de esta ciudad don Pedro A. Ruiz, su marido don José Clemente Contreras Erices vendió a su hija Josefina Contreras Cifuentes dos sitios ubicados en la manzana B de la nueva población Villa Contreras de esta ciudad, cuyos deslindes y dimensiones se indican

en ella. Esta venta se inscribió a favor de la compradora a fojas 66 vuelta, bajo el N.º 75 del Registro de Dominio del año 1937. Por escritura de 29 de Julio de 1936, ante el mismo Notario señor Ruiz, su hija Josefina vendió estos mismos sitios a favor de su mismo anterior vendedor y hermano Segundo Contreras y de Héctor, Gabriel y Teodoro Orlando Contreras Cifuentes, transferencia que se encuentra inscrita a sus nombres a fojas 71 vuelta, bajo el N.º 80 del Registro de Propiedades de 1937. Don Héctor Contreras es agricultor, domiciliado en Cuñibal. Las copias referidas rolan en los autos N.ºs 30638 sobre medida prejudicial precautoria. Todas estas propiedades vendidas por su marido a sus hijos, habían sido adquiridas durante la sociedad conyugal habida entre ellos, y se han hecho con grave perjuicio de sus intereses. Sus hijos mayores en las fechas de las ventas engañaron a su marido para que les hiciera ventas en vida de todos sus bienes, ya que todas las enajenaciones son simuladas, no obtuvo su marido un solo centavo y fue engañado con la escritura de usufructo a su favor y de ella. Sus hijos no están en posesión de ellas en la actualidad y durante todos estos años ha pagado la

contribución de todas las propiedades, las urbanas las ha tenido arrendadas y las rurales las ha explotado con medieros. La simulación de esos contratos de ventas resalta por sí sola, ya que todos ellos fueron otorgados en pocos días, sus hijos no tenían bienes para pagar un precio, aún algunos eran menores, jamás han pagado contribuciones, ni han tenido nunca la posesión de ellos y todos estos antecedentes establecen claramente la simulación. En consecuencia, las escrituras citadas y los contratos que de ellas emanan son nulos de nulidad absoluta, sanción que señala la ley para los actos y contratos simulados, por no tener una causa real y lícita. En esos contratos no hubo precio, no hubo causa para celebrarlo y la falta de causa trae la nulidad absoluta de los contratos. Termina solicitando que de acuerdo con las disposiciones legales que cita, se tenga por deducida acción de simulación en contra de las personas ya individualizadas anteriormente y que, en definitiva, y en forma subsidiaria a lo principal, se declare por el Tribunal lo siguiente: 1.º) Que las escrituras públicas señaladas en los números 1, 2 y 3 de este otrosí y que se han detallado son nulas de nulidad absoluta, como también los contratos de

compraventa que emanan de ellas, ya que en sus otorgamientos no ha habido una causa real, pues son contratos simulados, celebrados en perjuicio de terceras personas; 2.º) Que deben efectuarse las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que procedan para que queden sin efecto y sin valor alguno las escrituras citadas como sus respectivas inscripciones y las que llegasen a efectuarse durante la tramitación de la causa y que así queden las propiedades ya señaladas con sus inscripciones a favor de la sociedad conyugal habida con su marido; y 3.º) Que se condene a los demandados solidariamente en las costas de la causa.

A fojas 68 la parte demandante expone: que todos los demandados fueron oportunamente notificados de la demanda y éstos no la han contestado, por lo que estando el plazo vencido para hacerlo, viene en acusarles rebeldía. Pide se tenga por acusada la rebeldía y se tenga por evacuado el trámite de la contestación de la demanda en rebeldía de los demandados en la causa.

A fojas 69 la demandante replicando expone: que en esta causa solicita del Tribunal que en definitiva se acoja la demanda

NULIDAD DE CONTRATOS

415

en todas sus partes, con costas, por cuanto con los documentos acompañados a ella y aún con las propias declaraciones de los demandados, prestadas en las gestiones de absolución de posiciones, se ha acreditado fehacientemente los fundamentos de la demanda. Que durante el curso de la causa acompañará mayores antecedentes que probarán en forma irredargüible la efectividad de los hechos en que ésta se basa. Pide se tenga por evacuado el trámite de la réplica.

A fojas 70, don Ernesto Flores, agricultor, domiciliado en calle Cochrane s/n. de esta ciudad, en representación de su cónyuge doña Laura Estela Contreras Cifuentes, expone: que viene en duplicar en esta causa y manifiesta que en honor a la verdad y la justicia son exactos todos los hechos expuestos en la demanda. El señor José Clemente Contreras Ericés, con grave perjuicio de los intereses de su cónyuge doña Mercedes Cifuentes, vendió a su hijo mayor Clemente Contreras Cifuentes sus propietarios, o sea, todos sus bienes sin dejarse nada para su subsistencia y aún de sus hijos menores en aquella fecha. Todos los bienes habían sido adquiridos durante la sociedad conyugal con la señora Cifuentes, y

aún más, en esa venta a su hijo Clemente, otorgada por escritura pública de 14 de Julio de 1936 ante el Notario de esta ciudad don Pedro A. Ruiz, se comprendió una propiedad exclusiva de la señora Cifuentes. Posteriormente, Clemente Contreras vendió a su mujer y demás hermanos de ella, Josefina, Apolonia, Gabriel, Teodoro Orlando, Imilce Nora y Rosa Eliana estas propiedades denominadas "Chacayal" y "El Porvenir", sin que en esta venta ni en la anterior se haya pagado un solo centavo por precio, ya que eran escrituras simuladas, y ello se acredita con sólo leer dichas escrituras, ya que al otorgamiento de esta segunda escritura comparece nuevamente don Clemente Contreras Ericés, en representación de sus menores hijos comprando para ellos, o sea, para mi mujer, Apolonia, Gabriel, Teodoro Orlando, Imilce Nora y Rosa Eliana. Posteriormente algunos de los compradores hac querido desalojar a la demandante de dichos predios, que los tiene en usufructo. Termina solicitando que se tenga, por su parte, por evacuado el trámite de la duplica.

A fojas 71, don Fernando Contreras Loyola, empleado, en representación de su mujer doña

Rosa Eliana Contreras Cifuentes, labores del sexo, y Teodoro Orlando Contreras Cifuentes, empleado, domiciliado en Concepción, exponen: que evacuando el trámite de la dúplica por parte de ellos, estiman que los fundamentos en que se apoya la demanda son todos exactos y verídicos en todas sus partes, y ambos como hijos de la demandante señora Mercedes Cifuentes no pueden aceptar la forma como algunos hermanos han procedido con su madre, dejándola en el mayor desamparo. Su padre y demandado, don José Clemente Contreras Erices vendió por escritura de 14 de Julio de 1936, según escritura ante el Notario don Pedro A. Ruiz, a su hijo Clemente Segundo Contreras las propiedades denominadas "Chacayal" y "El Porvenir" con el objeto de que éste vendiera en forma proporcional a sus demás hermanos dichas propiedades como también otras que le habían sido vendidas en escrituras separadas y que se referían a una casa en calle Villagrán y dos sitios en la Nueva Población Villa Contreras, estas últimas propiedades ubicadas en esta ciudad y los predios "Chacayal" y "El Porvenir" en la subdelegación de Cuñibal de esta comuna. Su padre estipuló con su hijo antes mencionado, un

usufructo a su favor por toda la vida, ya que al vender todas las propiedades quedaba sin un solo centavo para afrontar los gastos de subsistencia, dejando a su cónyuge y demandante en la mayor miseria. Aún este usufructo fue posteriormente desconocido por los demandados, oponiéndose a su inscripción, teniendo la demandante que recurrir a la justicia para la inscripción del usufructo. Como consta de la escritura de 29 de Julio de 1936, que rola a fojas 29 de autos, los comparecientes y demandados en la causa, junto con otros hermanos, Apolonia, Gabriel e Imilce Nora eran menores de edad, y mal podían dar un centavo en esas compras, ya que la intención de su padre fue vender todos los bienes a sus hijos en forma simulada, para evitarse el pago de contribución de herencias en caso de fallecimiento. Además, todas las escrituras acompañadas a la demanda, como las que rolan en los autos sobre medidas precautorias, son simuladas y adolecen del vicio de que cuando se otorgaron existían varios embargos y prohibiciones sobre las propiedades vendidas. Todos esos contratos de venta se hicieron con perjuicio evidente y efectivo de los intereses y derechos de su madre, ya que esos bienes habían

NULIDAD DE CONTRATOS

417

sido todos ellos adquiridos durante la sociedad conyugal habida con su padre; esos bienes constituían todo el trabajo de la demandante, su madre. Estiman que es de justicia que se anulen las ventas efectuadas por su padre de los bienes que pertenecían, también, a su madre, ya que moralmente debe aceptarse dicha nulidad por la simulación que entrañan dichas escrituras, como también judicialmente por los vicios legales que existieron al otorgarse esas escrituras públicas de enajenación de los predios "Chacayal" y "El Porvenir", la propiedad de la calle Villagrán y los dos sitios ubicados en la Población Villa Contreras, todos ubicados en la comuna de Los Angeles. Además, dejan constancia que en la venta de los predios rústicos citados se comprendió una propiedad que pertenecía a la demandante señora Mercedes Cifuentes y que era de su propiedad exclusiva, en atención a que correspondía a herencia dejada por sus padres. Solicitan, finalmente, se tenga por evacuado el trámite por sus partes.

A fojas 73, la parte demandante expone: que las partes de don Clemente Contreras Erices; don Clemente Segundo Contreras Cifuentes; don Gabriel Contreras

Cifuentes; doña Josefina Contreras Cifuentes; doña Apolonia de las Mercedes Contreras Cifuentes; don Héctor Contreras Cifuentes y doña Imilce Nora Contreras Cifuentes, no han evacuado el trámite de la duplica, por lo que les acusa rebeldía, y que teniéndola por acusada se dé por evacuado el trámite y se provea como fuere de derecho.

A fojas 124 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta de autos a fojas 153 a 161.

En la sesión de prueba de fojas 154, la parte demandada tacha al testigo don José de la Rosa Fonseca Oviedo. El Juzgado dejó para definitiva la resolución de la tacha. A fojas 155 vuelta, en la sesión de prueba, la parte demandante se opone a la recepción de la prueba testimonial por la parte demandada, en razón de que la lista de testigos estaría presentada fuera de plazo. La parte demandada pide el rechazo de la oposición porque no tiene fundamento legal alguno. El Tribunal rechaza la incidencia. La parte demandante solicita reposición apelando en subsidio. El Juzgado rechaza la reposición y concede la apelación en el solo efecto devolutivo. A fojas 157, la parte demandante tacha al testigo Mi-

guel 2.º Chamorro Rodríguez por las causales de los números 1.º, 6.º y 7.º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. El Juzgado quedó de resolver en definitiva la tacha y ordenó oír la declaración del testigo. A fojas 158 la parte demandante tacha al testigo Emilio Burgos Pérez por las causales 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal dejó para definitiva la tacha y ordenó oír la declaración. A fojas 160 la parte demandante se opone a que declaren más testigos de la parte demandada por cuanto presentó seis testigos que es el máximo a que tiene derecho. La parte demandada pide el rechazo de la oposición. El Tribunal no dio lugar a la oposición y ordena recibir la declaración del testigo. La demandante solicita reposición de la resolución por cuanto no se encuentra ajustada a derecho y apela en subsidio. El Juzgado no dio lugar a la reposición y para proveer la apelación ordena completar el impuesto. A fojas 160 vuelta la parte demandante se opone en cuanto al punto tercero del interrogatorio se refiere a este hecho, con respecto a la declaración del testigo Juan Valdebenito Illesca. La parte demandada insiste en la pregunta. El Juzgado ordenó hacer la pregunta. La par-

te demandante pide reposición de la resolución y para el caso de negarse la reposición apela en subsidio. El Juzgado no dio lugar a la reposición y para conceder la apelación ordena que se complete el impuesto dentro del plazo legal.

A fojas 209, la parte demandante se desiste de las apelaciones subsidiarias interpuestas a fojas 108, 110, 156, 160 y 161.

A fojas 210, se citó a las partes para sentencia.

A fojas 210 vuelta el Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 767 del Código de Procedimiento y 116 del Código Orgánico de Tribunales, declara que la cuantía de este juicio es de ciento ochenta y nueve mil pesos.

Considerando en cuanto a las tachas:

1.º) Que el demandante tacha a fojas 157 al testigo Miguel 2.º Chamorro por afectarle las inhabilidades previstas en los números 1.º, 6.º y 7.º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Corresponde acoger la última causal, porque Chamorro manifestó a fojas 157 que es intimo

NULIDAD DE CONTRATOS

419

amigo de los demandados. Las otras causales se desestiman por no estar comprobadas;

2.º) Que la misma parte tacha a fojas 158 al testigo Emilio Burgos por afectarle las inhabilidades contempladas en los números 6.º y 7.º de la disposición legal citada. El Tribunal acoge esta última causal, porque Burgos manifestó a fojas 157 y 158 que es compadre del demandado Clemente Segundo Contreras, lo que constituye una manifestación de íntima amistad;

Considerando en cuanto al fondo:

3.º) Que las acciones fundamentales deducidas en la parte principal de la demanda de fojas 14 son: la de nulidad absoluta de las escrituras públicas de fojas 1 y 6, y de los contratos a que éstas se refieren, y la de exclusión de las ventas, a que se refieren esos instrumentos, de una propiedad que sería del dominio absoluto de la actora y que se encuentra inscrita a fojas 72 vuelta y bajo el N.º 83 del Registro de Propiedades y Dominios de este departamento del año 1907;

4.º) Que el documento de fojas 138 acredita que la actora es es-

posa legítima de don Clemente Contreras Erices y que ambos son los padres de los demandados;

5.º) Que los demandados Laura Estela Contreras, a fojas 70, y Eliana y Teodoro Contreras, a fojas 71, declaran aceptar la demanda en todas sus partes;

6.º) Que la actora fundamenta la acción de nulidad en haber sido otorgadas las compraventas de los fundos "Chacayal" y "El Porvenir" estando vigentes varios embargos y una prohibición de enajenar y gravar. Los contratos impugnados son los de fojas 1 y 6. En el primero don José Clemente Contreras Erices, marido de la actora, declara vender a su hijo Clemente Segundo Contreras los fundos "Chacayal" y "El Porvenir" en la suma de \$33.000 y que ha recibido este precio en dinero efectivo. En la escritura de fojas 6, Clemente Segundo Contreras vende esas propiedades a sus hermanos Josefina, Laura, Apolonia, Gabriel, Teodoro, Imilce y Rosa Contreras Cifuentes, en la suma de treinta y cinco mil pesos. A fojas 11 y 220 rolan copias autorizadas de la inscripción de este contrato;

7.º) Que los certificados de fojas 5 vuelta, 194 y 215 a 219 a-

creditan que en la fecha en que se otorgaron esos contratos, se encontraban vigentes una prohibición de enajenar y gravar y cuatro embargos sobre ciertos retazos que forman parte de los predios que hoy se denominan "Chacayal" y "El Porvenir";

8.º) Que el Tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones acerca de la identidad de los referidos retazos: a) el embargo transcrito a fojas 215 se ha trabado sobre un terreno de cuadra y media de extensión que forma parte del fundo "Chacayal". Así lo asevera el certificado de fojas 5 vuelta, el cual expresa que ese retazo aparece signado con la letra d) de la cláusula primera del contrato de fojas 1; b) no se ha podido identificar el bien raíz especificado en el embargo transcrito a fojas 216, porque los límites señalados en ese documento no pertenecen a ninguno de los terrenos delimitados en las cláusulas primera y segunda del contrato de fojas 1; c) el embargo transcrito a fojas 217 se ha trabado sobre un terreno compuesto de tres cuadras, el cual forma parte del fundo "Chacayal" y aparece signado con la letra m) de la cláusula primera del citado contrato; d) el embargo transcrito a fojas 218 se ha trabado sobre

el fundo "El Porvenir" cuyos deslindes generales se expresan en la cláusula segunda del recordado contrato; y e) la prohibición de enajenar y gravar transcrita a fojas 219 recae sobre dos terrenos de tres cuadras de extensión que forman parte del fundo "Chacayal" y que aparecen signados con la letra i) de la cláusula primera del contrato de fojas 1;

9.º) Que es conveniente dejar constancia de una observación atinente a los hechos estudiados en el fundamento anterior. Se refiere a que no se ha encontrado una identidad absoluta entre los deslindes señalados en el contrato de fojas 1 con respecto al retazo signado con la letra m) de la cláusula primera y al del fundo "El Porvenir" (cláusula segunda) y los que se indican en los instrumentos de fojas 217 y 218. En el primer caso la diferencia se concreta en el límite Oriente y en el segundo caso en el límite Sur. Los demás deslindes coinciden perfectamente. En el concepto del sentenciador, esta anomalía tiene explicación en las fechas distantes en que se otorgaron los referidos documentos. Por último, se hace notar que el instrumento de fojas 212, emanado de la Administración de Impuestos Internos de esta ciudad,

NULIDAD DE CONTRATOS

421

señala la ubicación y deslindes del fundo "El Porvenir" y en esto coincide con los límites consignados en el contrato de fojas 1;

10.º) Que el artículo 1810 del Código Civil declara que no pueden venderse las cosas corporales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por la ley. El artículo 1464 números 3 y 4 declara que hay objeto ilícito en la enajenación de bienes que están sujetos a embargos o prohibiciones de enajenar, y el artículo 1682 de ese cuerpo de leyes declara nulos absolutamente los contratos que adolezcan de objeto ilícito. Todas estas disposiciones legales no dejan dudas de la nulidad absoluta de que adolecen los contratos de fojas 1 y 6, por lo cual procede acoger la acción de nulidad deducida en lo principal del libelo de demanda;

11.º) Que en atención a lo dictaminado en el fundamento anterior, no procede resolver la otra acción deducida por la actora en la parte principal de la demanda y a que se ha hecho referencia en el motivo tercero (acción de exclusión) ni la acción subsidiaria formulada en el primer otrosí de ese libelo, por ser incompatibles con la aceptación de la acción de nulidad;

12.º) Que no obstante lo expuesto anteriormente, el Tribunal ponderará brevemente la prueba rendida por las partes para acreditar esas acciones;

13.º) Que sobre la primera de ellas, existe el instrumento público corriente a fojas 12 de la causal civil N.º 30638, ordenada tener a la vista por resolución de fojas 220 vuelta. Este documento es una copia autorizada de la inscripción conservadora de los retazos de terrenos pertenecientes a la demandante y situados en la subdelegación Pedregal de este departamento. Acredita ese documento que la actora adquirió esos bienes a título gratuito y en este hecho se encuentra la causa de esta acción que lleva como fin que el Tribunal declare que esos terrenos quedan excluidos de los contratos corrientes a fojas 1 y 6 por tratarse de bienes propios de la actora. Es inoficioso pronunciarse sobre esta acción, porque habiéndose declarado la nulidad de las referidas escrituras, ha quedado sin efecto la venta del bien raíz a que se refiere el documento de fojas 12;

14.º) Que la acción subsidiaria de simulación se encuentra fundamentada en los siguientes hechos: según la actora los con-

tactos que rolan a fojas 1 y 6 de estos autos y los que corren a fojas 8, 9, 10 y 11 de la causa civil N.º 30638 sobre medida prejudicial precautoria —que se ha ordenado tener a la vista por resolución de fojas 210 vuelta— serían simulados porque ningún comprador pagó precio, ya que sus hijos no tenían dinero para hacerlo, aún algunos eran menores de edad, ella ha conservado la posesión de todas las propiedades objetos de esos contratos y paga las contribuciones territoriales correspondientes. Los dos primeros contratos son los mismos a que se ha hecho referencia en los fundamentos anteriores. Respecto a los que se encuentran incorporados en la causa N.º 30638, pasamos a detallarlos: el de fojas 8 es un contrato extendido por escritura pública de fecha 24 de Julio de 1936, en virtud del cual don Clemente Contreras Erices vende a su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes una casa y sitio ubicada en la calle Villagrán de esta ciudad que el vendedor había adquirido por compraventa otorgada el año 1929, o sea, durante el matrimonio con la actora, que se celebró el año 1906; el de fojas 9 es un contrato extendido en la misma forma de fecha 29 de Julio de 1936, en virtud del cual Clemente Segundo Contreras Ci-

fuentes vende esa propiedad a sus hermanas Josefina, Apolonia, Imilce y Rosa Contreras Cifuentes; el de fojas 10 es un contrato otorgado con fecha 27 de Julio de 1936, en virtud del cual don Clemente Contreras Erices vende a su hija Josefina Contreras dos sitios ubicados en la manzana B, de la Nueva Población Villa Contreras de esta ciudad que adquirió por compraventa celebrada el año 1916; y el de fojas 11 que es un contrato otorgado el día 29 de Julio de 1936, en virtud del cual doña Josefina Contreras vende esa propiedad a sus hermanos Clemente Segundo, Héctor, Gabriel y Teodoro Contreras Cifuentes. Por último, se deja constancia que a fojas 224 y 225 rolan copias de las inscripciones de los contratos de fojas 9 y 11;

15.º) Que la prueba rendida por las partes para acreditar la acción subsidiaria puede clasificarse en tres grupos: A.—1) Prueba confesional favorable a la referida acción. Confesiones de don Clemente Contreras Erices, a fojas 31, 104, 108 y 266; de Laura E. Contreras, fojas 42 y 43 y 132 y 133; de Rosa Contreras, de fojas 44 y 45 y 148 y 149; de Teodoro Contreras, de fojas 46 y 46 vuelta y 151 y 152; de la demandante, fojas 170 y 171 y de I-

NULIDAD DE CONTRATOS

423

milce Contreras, fojas 200 (se tuvieron por absueltas según resolución de fojas 197 vuelta); 2) Prueba confesional contraria a esta acción. Confesiones de Clemente Segundo Contreras, a fojas 29 y 30, 106, 109 y 110; de Gabriel Contreras, fojas 114 y 121; de Apolonia Contreras, fojas 116, 121 vuelta y 122; de Josefina Contreras, fojas 118 y 122; y de Héctor Contreras, fojas 120 y 122. B.—1) Prueba testimonial presentada por la parte demandante. Don Juan Burgos, primer empleado de la Notaría Ruiz, donde se extendieron las cuestionadas escrituras, expresa a fojas 153 que no se pagó precio, porque la intención de los contratantes era efectuar la partición del patrimonio de don Clemente Contreras Erices entre sus herederos, dejándose a éste el usufructo de todos sus bienes. El testigo don José María Fonseca, a fojas 154 vuelta y 155 manifiesta que en conversaciones que sostuvo con don Clemente Contreras, éste le expresó que había vendido a su hijo Clemente Segundo los fundos "Chacayal" y "El Porvenir" con el fin de partir, en vida, todos sus bienes y evitar en esa forma las dificultades que se producen entre los herederos con motivo del fallecimiento del causante. Además, Clemente Segundo Contre-

ras le expresó que no se había pagado precio por esa escritura. 2) Prueba testimonial presentada por la parte demandada. Los testigos Miguel Chamorro, fojas 157, Emilio Burgos, fojas 157 vuelta y 158; José Rosas, fojas 158; Salvador Lara, fojas 159 vuelta y 160 y Juan Valdebenito, fojas 160 vuelta, están contestes en sostener que la escritura de fojas 1 no es simulada. Los testigos Chamorro, Burgos y Lara afirman que don Clemente Contreras les manifestó que había recibido el precio, al firmar el contrato de fojas 1. C.—Prueba documental presentada por la parte demandante y a que no se ha hecho referencia en esta sentencia. Los recibos de contribuciones corrientes de fojas 172 a 191. Estos documentos comprueban que la demandante ha pagado desde 1936 a 1952 las contribuciones de las propiedades denominadas fundo "El Porvenir"; casa de la calle Villagrán N.º 244 y sitios ubicados en la calle Colo Colo de esta ciudad que corresponden a la actual Población Villa Contreras. El detalle de esos documentos es el siguiente: fojas 172. El Aromo. Primer semestre de 1936; fojas 173. El Porvenir. Segundo semestre de 1944; fojas 174. El Porvenir. Segundo semestre de 1946; fojas 175. El Porvenir. Pri-

mer semestre de 1947; fojas 176. El Porvenir. Segundo semestre de 1948; fojas 177. El Porvenir. Primer semestre de 1949; fojas 178. Colo Colo. Segundo semestre de 1951; fojas 179. Villagrán N.º 254. Segundo semestre de 1938; fojas 180. Villagrán N.º 244. Segundo Semestre de 1945; fojas 181. Villagrán N.º 244. Segundo semestre de 1946; fojas 182. Villagrán N.º 244. Segundo Semestre de 1949; fojas 183. Villagrán N.º 244. Primer Semestre de 1950; fojas 184. Villagrán N.º 244. Segundo semestre de 1951; fojas 185. Colo Colo. Primer semestre de 1936; fojas 186. Colo Colo. Primer semestre de 1938; fojas 187. Colo Colo s/n. Segundo semestre de 1943; fojas 188. Colo Colo. Segundo semestre de 1944; fojas 189. Colo Colo. Segundo semestre de 1948; fojas 190. Colo Colo. Primer semestre de 1951; fojas 191. Colo Colo. Primer semestre de 1952;

16.º) Que la parte demandante ha presentado al juicio varios antecedentes probatorios que no llevan mayor luz a la cuestión debatida. Son los siguientes: A) El documento de fojas 10 es una copia autorizada de la inscripción conservadora del derecho de usufructo otorgado por Clemente Contreras Cifuentes, según escri-

tura pública de fecha 27 de Julio de 1936, a favor de sus padres sobre los predios denominados "Chacayal" y "El Porvenir". La inscripción fue ordenada efectuar por la justicia ordinaria y tiene fecha 5 de Febrero de 1951; B) Los documentos de fojas 79 y 139 son copias autorizadas de la querella posesoria entablada por Gabriel Contreras y otros contra sus padres, con el fin de hacer cesar las perturbaciones a la posesión en los predios "Chacayal" y "El Porvenir" que se traducen en el ejercicio del derecho de usufructo citado en la letra anterior, y en la celebración de un contrato de arriendo entre don Clemente Contreras Erices y don Gilberto Estrada sobre los mencionados predios. (Los documentos mencionados son copias de una misma demanda); C) Los escritos de fojas 83 y 83 b) son copias timbradas de escritos presentados por las partes en ese juicio y que carecen de interés práctico en relación a la cuestión debatida en este juicio; D) El expediente N.º 30433 del Rol de causas civiles de este Juzgado versa sobre la petición formulada por doña Mercedes Cifuentes —que fue acogida— para obtener que el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad inscribiera la escritura pública donde se constituye el recordado dere-

NULIDAD DE CONTRATOS

425

cho de usufructo; E) El expediente N.º 30638 del mismo rol se refiere a la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre las propiedades objeto del presente juicio, solicitada por la demandante doña Mercedes Cifuentes y concedida por este Juzgado a fojas 17 de esa causa. El Tribunal ordenó a fojas 210 tener a la vista ese expediente, porque en él rolan documentos mencionados, como fundamentales, en la demanda. En la parte principal de ese libelo se cita la escritura que rola a fojas 12 y en la que trata la acción subsidiaria se mencionan los documentos corrientes a fojas 8, 9, 10, y 11, todos los cuales han sido analizados anteriormente. Resta referirse a los demás instrumentos que rolan a fojas 1, 2, 4, 6 y 7. El de fojas 1 es el contrato de matrimonio celebrado por la demandante con don José Clemente Contreras Erices y que ya ha sido ponderado al referirnos al documento de fojas 138. El de fojas 2 es un contrato suscrito el 12 de Enero de 1930 entre don Clemente Contreras Erices, como vendedor, y su hijo Héctor Contreras, como comprador, en virtud del cual el primero vende al segundo tres retazos de terreno, dos de ellos sembrados con plantas de viñas. El de fojas 4 es un con-

trato de la misma naturaleza celebrado en la fecha citada, en virtud del cual don Clemente Contreras Erices vende a don Clemente Segundo Contreras y a Héctor Contreras tres hijuelas ubicadas en la subdelegación de Cuñibal. Este documento fue otorgado el día 29 de Julio de 1936. El de fojas 7 corresponde a la inscripción de esta escritura. Estos documentos no han sido mencionados por la parte demandante durante la secuela del juicio;

17.º) Que, por último, resta referirse a un medio de prueba que es el informe de fojas 227. Emanado de la Administración de Impuestos Internos de esta ciudad, y en él se señalan los deslindes del fundo "Chacayal" que pertenecería a doña Eliana Contreras. El Tribunal solicitó este informe con el fin de conocer la ubicación exacta de esa propiedad.

Visto, además, lo dispuesto en los artículos 1464 N.os 3 y 4, 1682 y 1810 del Código Civil y 144, 170 y 358 N.º 7 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

1.º) Que ha lugar a la tacha deducida por la parte demandante a los testigos Miguel 2.º Chamorro y Emilio Burgos, porque

les afecta la causal 7.ª del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil con respecto a la parte demandada;

2.º) Que no ha lugar a las demás tachas deducidas por la parte demandante a los mismos testigos;

3.º) Que ha lugar a la acción principal de nulidad de los contratos de compraventa corrientes a fojas 1 y 6 de estos autos, o sea, que ha lugar a los puntos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º de la parte petitoria escrita a fojas 16 y 16 vuelta;

4.º) Que el Tribunal no se pronuncia sobre la acción subsidiaria de simulación ni sobre la acción de dominio del bien raíz concretada en el punto 4.º de esa parte petitoria, porque su sentenciamiento sería incompatible con lo dictaminado en este fallo, respecto a la acción de nulidad acogida en el número tercero de esta parte dispositiva.

Los demandados pagarán solidariamente las costas de este juicio.

Anótese y complétese el impuesto.

Julio Rojas Bañados.

Dictada por el señor Juez Letrado titular don Julio Rojas Bañados. — Fanor Ormazabal, Secretario.

Sentencia de Segunda Instancia

Concepción, catorce de Septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.

Vistos:

Reproduciendo la parte expositiva de la sentencia en alzada: sus fundamentos, menos los signados bajo los números 10.º, 11.º y 12.º, que se eliminan; suprimiendo del considerando 13.º las frases "sobre la primera de ellas, existe" y "Este documento"; sus citas legales y teniendo, además, presente:

1.º) Que la acción principal de la demanda de fojas 14 se encuentra encaminada, primeramente, a obtener la nulidad absoluta de las escrituras públicas de 14 y 29 de Julio de 1936, respectivamente, autorizadas por el Notario a la sazón de Los Angeles, cuya causa de pedir es el hecho de haberse encontrado vigente, a la fecha en que se otorgaron, varios embargos y una prohibición de enajenar y gravar los inmuebles

NULIDAD DE CONTRATOS

427

objeto de los contratos de compraventa de que dan cuenta esos instrumentos públicos;

2.º) Que la circunstancia de que pudieran ser nulos absolutamente los negocios jurídicos contenidos en esas escrituras públicas no importa, como se sostiene por la actora, que igual sanción haya de aplicarse al instrumento mismo, por mucho que éste último, como en el caso sub lite, sea requerido por el Código Civil como solemnidad del acto o contrato (artículo 1801 inciso 2.º);

3.º) Que si bien es verdad que cuando la ley exige el otorgamiento de un instrumento público para la validez de un negocio jurídico, la nulidad del primero trae consigo forzosamente la nulidad del último (artículo 1701, inciso 1.º del Código Civil), lo que ciertos doctrinadores denominan "nulidad refleja", la verdad es que, a la inversa, la nulidad del acto jurídico no acarrea la invalidez del instrumento en que está otorgado, de manera que una adecuada independencia existe en este último caso entre el acto y el instrumento, ya que en tal evento ninguna vinculación existe entre la nulidad del negocio y la del instrumento en que se otorga;

4.º) Que, por consiguiente, no habiéndose sostenido ni probado que en el otorgamiento de esas escrituras públicas se haya faltado a alguno de los requisitos exigidos por la ley como solemnidad de las mismas, es natural y obvio que esa petición debe ser desestimada;

5.º) Que la segunda petición de la acción principal tiene por objeto que se declare la nulidad absoluta de los contratos de compraventa a que se refieren las mismas escrituras ya citadas, respecto de los predios "Chacayal" y "El Porvenir", individualizados y deslindados en dichas escrituras, argumentando la actora que en el momento de su celebración hubo objeto ilícito, desde que había embargos y una prohibición vigentes respecto de los referidos inmuebles;

6.º) Que el artículo 1683 del Código Civil permite alegar la nulidad absoluta, cuya sería la sanción en el caso de autos (artículos 1464 N.º 3, 1682 inciso 1.º y 1810 del Código Civil), entre otras personas, a todo el que tenga interés en ello, que es justamente lo que hace presente la actora para legitimar su acción. Sostiene, en este orden de ideas, que los contratos de venta se han

otorgado perjudicando sus intereses, ya que todos los bienes fueron adquiridos durante la sociedad conyugal que ha habido con su marido (fojas 16);

7.º) Que, efectivamente, la demandante contrajo matrimonio con uno de los demandados, José Clemente Contreras Erices, que actuó como vendedor en el contrato de 14 de Julio de 1936, el 5 de Julio de 1906, como se acredita con la libreta de familia que corre a fojas 1 y siguientes del proceso Rol 30638, del ingreso del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Los Angeles, que se ha tenido a la vista; matrimonio que se encontraba vigente a la fecha del referido contrato de compraventa, a la de la interposición de la demanda y en la actualidad. Y como el matrimonio se contrajo, en lo que al régimen de los bienes se refiere, bajo el de la sociedad conyugal o de comunidad de gananciales, por mandato de los artículos 135 inciso 1.º y 1718 del Código Civil, hay que concluir, atendidos los antecedentes que se suministran en el contrato de 14 de Julio de 1936, que los predios vendidos en esa fecha eran sociales (artículo 1725 N.º 5 del Código Civil);

8.º) Que interesa analizar si la mujer casada bajo el régimen de

sociedad conyugal y vigente ésta, particularmente a la fecha de la celebración de los contratos impugnados y a la de la notificación de la demanda —año 1951— tiene el interés que exige el artículo 1683 de la codificación citada para intentar la acción de nulidad absoluta de los contratos que haya podido celebrar el marido y respecto de los bienes sociales;

9.º) Que en el artículo 1683 ya mencionado no se ha definido lo que debe entenderse por "interés" para accionar de nulidad absoluta; pero se comprende, tanto por lo que se establecía en el artículo 1866 del Proyecto de 1853, cuanto por la intervención que en el solo interés de la moral y de la ley se confiere al ministerio público por el indicado artículo 1683, que ese interés no puede ser otro que uno pecuniario, sujeto a la declaración de nulidad del respectivo negocio jurídico, vale decir en este caso tanto el de 14 como el de 29 de Julio de 1936, respectivamente; interés que ha de tenerse al tiempo de producirse la nulidad, esto es, al realizarse la infracción de la ley que lleva consigo tal sanción;

10.º) Que la actora, casada bajo el régimen de sociedad conyu-

NULIDAD DE CONTRATOS

429

gal a la sazón en que los contratos impugnados se celebraron y también cuando interpuso la presente demanda, no tenía derecho alguno sobre los bienes sociales (artículo 1752 del Código Civil), de manera que respecto de terceros el marido es dueño de esos bienes, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio (artículo 1750 del Código Civil);

11.º) Que esta ausencia de derecho de la mujer respecto del patrimonio social, vigente la sociedad conyugal, queda mayormente de manifiesto si se recuerda, aunque sumariamente, que el autor de nuestro principal cuerpo de leyes ilustró su pensamiento con las siguientes expresiones, entre otras: "Se ha descartado el dominio de la mujer en los bienes sociales durante la sociedad; ese dominio es una ficción que a nada conduce" (nota al título 22 del libro IV del Proyecto de 1853, que corresponde a los actuales artículos 1715 y siguientes). Y para poner más en claro esta idea se apoyó en Matienzo, cuyo glosa decía, en parte: "Durante el matrimonio la mujer no tiene el dominio propiamente, tiene un crédito, un derecho in habitu y este derecho en potencia no tiene consistencia real, porque el mar-

do puede, sin fraude, enajenar y disponer de los bienes sociales. El dominio de la mujer queda en suspenso, como una nebulosa, que dura hasta que el matrimonio se disuelve; pero una vez disuelto, ese dominio, oculto mientras estaba en potencia, se transforma en un derecho efectivo y se forma una comunidad verdadera y actual en que la mujer tiene realmente dominio y posesión";

12.º) Que tan evidente es esto que el legislador, para cautelar los derechos en potencia de la mujer, la autorizó, no para pedir la nulidad de los actos o contratos celebrados por su marido durante la vigencia de la sociedad, sino para poner en movimiento otras acciones, como lo es la de separación total de bienes (artículo 155 del Código Civil). Además, hoy en día, para paliar en parte este poder absoluto de administración y disposición de los bienes sociales que el Código Civil le acordaba al marido, la Ley 10.271, de 2 de Abril de 1952, modificando, entre otros, el artículo 1749 de la citada codificación, exige la autorización de la mujer para que su cónyuge pueda convenir, entre otros negocios jurídicos, la enajenación voluntaria de los bienes raíces sociales;

13.º) Que, por consiguiente, debe concluirse que la actora, durante la sociedad conyugal, tiene una simple expectativa de llegar a adquirir la mitad de los gananciales a la disolución de esa sociedad; la posibilidad, en suma, de llegar a ser comunera con el marido o los sucesores de éste; pero tal expectativa no le confería a la demandante, bien se mire el asunto a la fecha de la celebración de los contratos impugnados de nulidad o a la de interposición de la demanda, un interés pecuniario que justificara la acción de nulidad absoluta que ha interpuesto;

14.º) Que la petición tercera de la demanda principal, consecuencia de la declaración de nulidad absoluta que se ha solicitado y analizado arriba, no puede prosperar, pues para ello es forzoso que esa nulidad sea declarada, como la misma demandante lo manifiesta;

15.º) Que se ha pedido, como cuarta cuestión que debe ser resuelta por el tribunal, que en las ventas a que se refieren las escrituras de 14 y 29 de Julio de 1936, ya citadas, no ha podido quedar comprendido un inmueble propio de la demandante, que habría adquirido a título gratuito

durante la vigencia de la sociedad conyugal con José Clemente Contreras Erices;

16.º) Que en el fundamento 11 de la sentencia enalzada y en la parte resolutive de la misma el Juez a quo no se pronunció sobre esta petición, en atención a que acogió la demanda de nulidad absoluta invocada primeramente; pero rechazada esa nulidad, como fluye de los fundamentos precedentes, conforme al artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte la entra a considerar;

17.º) Que de los antecedentes suministrados por los escrituras de 14 y 29 de Julio de 1936, ya citadas, no aparece en forma alguna que se haya comprendido en ellas el inmueble a que se refiere el instrumento de fojas 12 del cuaderno agregado Rol 30.638, pues los títulos de dominio que se citan por el vendedor en el contrato de 14 de Julio de 1936 no tienen nada que ver con la inscripción de dominio de fojas 72 vuelta N.º 83 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles, del año 1907, en que apoya la actora su mencionada petición;

18.º) Que de acuerdo con el fundamento precedente y el tenor

NULIDAD DE CONTRATOS

431

literal de la petición que se analiza cabría concluir que debe ser acogida, desde que efectivamente el inmueble respecto del cual la actora sostiene que es propio y no social no ha quedado comprendido en las compraventas cuestionadas; pero, en el fondo, no es eso lo que la demandante solicita sino que, para el caso que hubiera sido el inmueble propio objeto también de esos negocios jurídicos, se declare que no pueden ni han podido referirse a un inmueble que no era social sino de su patrimonio:

19.º) Que así encuadraba en los términos justos en que la petición debió ser formulada no puede ser admitida, desde que no se ha puesto en movimiento una acción enderezada a tal finalidad, como pudo haber sido la de venta de cosa ajena, la de inoponibilidad u otra;

20.º) Que se ha solicitado, por último, que los demandados sean condenados solidariamente al pago de las costas; pero tal petición, en la forma solidaria en que se ha solicitado, no puede ser aceptada, desde que la sentencia judicial no es fuente de solidaridad (artículo 1511 del Código Civil). Cuando el legislador ha querido que varias personas respondan

solidariamente del pago de las costas ha necesitado decirlo (artículo 787 del Código de Procedimiento Civil), pero entonces resulta que es también la ley la fuente de la solidaridad. Y si bien es cierto que el artículo 27 del Código de Procedimiento Civil ordena responder solidariamente del pago de los derechos que sean de cargo de quienes litigan conjuntamente, no es ésta la situación en el presente proceso, desde que los demandados no han litigado conjuntamente;

21.º) Que se ha propuesto, como acción subsidiaria, la nulidad de los siguientes instrumentos públicos autorizados todos por el Notario a la fecha de Los Angeles don Pedro A. Ruiz:

a) Escritura de 14 de Julio de 1936, que da cuenta de un contrato de compraventa celebrado entre don José Clemente Contreras Erices y su hijo Clemente Segundo Contreras Cifuentes, respecto de los fundos "Chacayal" y "El Porvenir";

b) Escritura pública de 29 de Julio de 1936, mediante la cual Clemente Segundo Contreras Cifuentes vendió los anteriores predios a sus hermanos Josefina, Laura Estela, Apolonia de las Mercedes, Gabriel, Teodoro Or-

lando, Imilce Nora y Rosa Eliana Contreras Cifuentes;

c) Escritura de 24 de Julio de 1936, que se refiere a un contrato de compraventa celebrado entre José Clemente Contreras Erires y Clemente Contreras Cifuentes, respecto de una casa y sitio ubicado en calle de Villagrán de la ciudad de Los Angeles, cuyos deslindes se expresan en ella;

d) Escritura de 29 de Julio de 1936, que da constancia de un contrato de compraventa, referente a la casa anteriormente citada, y pactado entre Clemente Segundo Contreras y sus hermanos Josefina, Apolonia de las Mercedes, Imilce Nora y Rosa Eliana Contreras Cifuentes;

e) Escritura de 27 de Julio de 1936, relacionada con un contrato de compraventa pactado entre don José Clemente Contreras Erires y doña Josefina Contreras Cifuentes, cuyo objeto son dos sitios ubicados en la manzana B de la nueva población Villa Contreras de la ciudad de Los Angeles, con la cabida y deslindes que en el instrumento se expresan; y

f) Escritura de 29 de Julio de 1936, por la que Josefina Contreras Cifuentes dio en venta los sitios señalados anteriormente a sus hermanos Segundo, Héctor, Gabriel y Teodoro Orlando Contreras Cifuentes;

22.º) Que la petición subsidiaria de nulidad de esas escrituras se finca en el hecho de ser simulados los contratos de compraventa a que ellos se refieren, pues no habría existido verdaderamente precio, por manera que falta en esos contratos una causa real y lícita;

23.º) Que para desestimar esta primera petición concreta de la acción subsidiaria de simulación, cabe tener presente las mismas consideraciones que se han indicado en los fundamentos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de esta sentencia. Además, de que la impugnación de la verdad de las declaraciones que hayan podido hacer las partes en un instrumento público no importa, como parece sostenerlo la demandante, atacar el instrumento mismo, en cuanto a la fe pública de él, desde que no por ser contrario a la realidad lo declarado por los contratantes en una escritura pública viene la consecuencia de ser nulo el instrumento, si se considera que esos instrumentos cumplen en todo con los requisitos generales señalados por el artículo 1699 del Código Civil, sin que la actora haya siquiera pretendido acreditar que se faltó en su otorgamiento a alguna de las solemnidades legales o que el

NULIDAD DE CONTRATOS

433

funcionario que intervino no era competente;

24.º) Que la segunda petición concreta de esa acción subsidaria de simulación tiene por finalidad que se declare la nulidad absoluta de los contratos mismos a que se refieren los instrumentos mencionados en el considerando 21.º, fundándose en que realmente no son contratos de compra-venta, pues no hubo precio, faltando así una causa real y lícita;

25.º) Que mediante la acción de simulación se pretende, en general y sin entrar en mayores disquisiciones doctrinarias, que la voluntad declarada no corresponde a la realmente querida, esto es, que hay disconformidad entre la intención real y la declaración; figura jurídica en que las partes se ponen de acuerdo para darle a la declaración de voluntad un sentido diverso de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente, o en perjuicio de la ley o de terceros;

26.º) Que de la pretendida simulación la actora desprende la nulidad de los contratos mencionados en el considerando 20.º de este fallo, por cuanto faltaría a los mismos una causa real y lícita,

por haberse otorgado en perjuicio de terceras personas;

27.º) Que la petición que se viene analizando no puede ser admitida, desde que obstan a su aceptación los mismos fundamentos que se han señalado en los considerandos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º y 12.º de esta sentencia, porque en una y otra acción es la nulidad absoluta la que se hace valer, si bien en el presente caso apoyada en la falta de causa real y lícita;

28.º) Que, además, si bien el marido no puede realizar actos, como administrador de la sociedad conyugal, en fraude de los derechos de la mujer, sea para hacer imposible la devolución de los aportes que haya podido realizar esta última, o para disminuir o hacer desaparecer su mitad de gananciales, la verdad es que la acción de la mujer enderezada a obtener la sanción de esos actos fraudulentos no puede ponerla en movimiento vigente la sociedad conyugal, como se ha hecho en el caso de autos, sino una vez que ha desaparecido dicha sociedad. Mientras subsiste la sociedad la mujer carece de toda acción por actos fraudulentos realizados por el marido, desde que la procedencia de la acción dependerá del partido que ella adopte a la diso-

lución, esto es, si acepta los gananciales, del resultado de la liquidación de la sociedad conyugal, etc.;

29.º) Que cabe agregar, también, que si bien las probanzas rendidas en el proceso por la actora, sobre quien recaía el peso de la prueba, permiten concluir que algunos de los demandados han confesado que en los contratos atacados de nulidad no existió precio —como lo han reconocido a fojas 31, 107 y 206 el demandado José Clemente Contreras Erices; a fojas 42 y 133 Laura Estela Contreras Cifuentes; a fojas 46 y 151 Orlando Contreras Cifuentes; a fojas 197 Imilce Nora Contreras Cifuentes; y a fojas 45 Rosa Eliana Contreras Cifuentes—; y que lo mismo han dicho los testigos que depusieron a fojas 153, 154, 155 y 156, la verdad es que están de acuerdo —absolventes y testigos— de que en el fondo hubo por parte del demandado José Clemente Contreras Erices la intención de realizar lo que denominan “una partición en vida”, de donde se desprende que el negocio realmente querido es perfectamente lícito, como que el artículo 1318 del Código Civil autoriza al difunto para realizar la partición por acto entre vivos. Ahora bien, así con-

siderada la cuestión habría en la especie lo que se denomina por los doctrinadores simulación relativa, esto es, que frente al negocio ficticio las partes están de acuerdo en concluir uno diverso, de manera que si bien el acto aparente no tiene fuerza obligatoria, el oculto la tiene, no afectando los intereses de terceros. La ley no prohíbe la simulación sino en cuanto, como se desprende del artículo 471 N.º 1 del Código Penal, con ella se perjudica a un tercero; pero ya está dicho que, en el estado de mujer casada bajo el régimen de comunidad de gananciales en que se encuentre la demandante, ningún perjuicio real y efectivo se ha podido ocasionar a la actora, pues no ha llegado el caso de valorizarlo, como se ha dejado expuesto: perjuicio que, por lo demás, no se ha acreditado;

30.º) Que se ha pedido, como consecuencia de la nulidad subsidiaria que se ha impetrado, que se realicen “las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que procedan para que queden sin efecto y sin valor alguno las escrituras citadas como sus respectivas inscripciones y las que llegasen a efectuarse durante la tramitación de la causa”; pero tal petición no puede prosperar sino a condición de que se aceptara la

NULIDAD DE CONTRATOS

435

nulidad subsidiariamente invocada, la que, como se ha dicho, no puede ser admitida; y

31.º) Que, por último, se ha solicitado la condena solidaria en las costas de los demandados, a lo que obstan los razonamientos que se expresaron en el considerando 20.º de esta sentencia.

Por estas consideraciones y teniendo presente, también, lo prescrito en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de primero de Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, escrita a fojas 234 y siguientes, en cuanto por ella se acoge la demanda de fojas 14 y siguientes, y se declara que no ha lugar a esa demanda en ninguna de sus peticiones, principal ni subsidiaria, sin costas por haber tenido la actora fundamentos plausibles pa-

ra interponer la demanda. Se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.

Anótese y devuélvase. Agréguese el impuesto correspondiente, antes de notificar.

Publíquese.

Redacción del señor Abogado integrante don Ramón Domínguez Benavente.

Lucas Sanhueza R. — Rolando Peña L. — Ramón Domínguez Benavente.

Dictada por los señores Ministros titulares de la Ilustrísima Corte, don Lucas Sanhueza Ruiz y don Rolando Peña López, y Abogado integrante, don Ramón Domínguez Benavente. — Enrique Lagos Valenzuela, Secretario.